

Arica, treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A Folio 3 del expediente remitido desde la ltma. Corte de Apelaciones de Iquique, comparece Silvana Neira Galleguillos, Defensor Penal Público, en representación de Yudith Rosalith Padrino Suarez, venezolana, actualmente privada de libertad en Centro Penitenciario de Alto Hospicio, quien deduce recurso en amparo en Contra del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, por sentencia de 29 de julio del 2024 en causa RIT: 2470-2023, RUC 2310081649-0, en aquella parte que rechazó el otorgamiento de pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva.

La recurrente fue condenada a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de tres unidades tributarias mensuales y a las accesorias legales como autora del delito consumado de tráfico ilícito de drogas, cometidos el día 24 de noviembre de 2024 en la Comuna de Huara, pena efectiva debido a que se determinó que no se cumplieron los requisitos establecidos para la procedencia de la pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva, al no tener arraigo en Chile, sosteniendo que a su parecer, su defendida si cumple con los mismos, por lo que dicha sentencia le causa agravio.

Sostiene que la sentencia impugnada mediante esta acción de amparo ha sido expedida en forma ilegal, afectando el derecho a la libertad personal consagrado en el art. 19 N°7 de la Carta Fundamental, toda vez que ésta no ha sido dictada en los casos y formas determinados en la ley, puesto que es carente de fundamentación deviniendo por tanto en ilegal.

Pide que se acoja el recurso y en definitiva se revoque la sentencia de fecha 29 de julio del 2024 dictado en causa RIT: 2470-2023, RUC 2310081649-0 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique en aquella parte que rechazó la imposición de la pena sustitutiva de Libertad Vigilada Intensiva, se acceda a la imposición de la pena sustitutiva y se ordene su inmediata libertad.

A folio 63, informa el Tribunal recurrido, expresando, en esencia, eran efectivos los hechos que da cuenta el recurso, tanto en cuanto a la celebración de una audiencia de juicio, la dictación de la sentencia y la forma de cumplimiento de la condena, expresando que la amparada no reúne los requisitos exigidos por la Ley N°18.216, como se analizó en el considerando decimosexto del fallo.

Sostienen que en el considerando decimotercero del fallo se analizaron las peticiones de la defensa, especialmente informe social de doña Patricia Lamilla, expresó que la peritada mantenía domicilio en Doñihue, que tenía 4 hijos, de 25 a 14 años, el menor de edad escolarizado, que su pareja falleció en 2019 y posteriormente decide migrar a Chile, conviviendo hace 2 años con José Beltrán



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WDBXPXUXSR

Levinao, en la comuna de Doñihue, calle La Cólera sin número, trabajando como temporera y asesora de hogar, su pareja es su red de apoyo, quien mantiene contacto telefónico con la acusada en el penal. En lo psicológico, el perito Gerardo Salazar Cataldo indicó que la peritada presentó un bajo índice de reincidencia, con expectativas realistas de cumplir con los objetivos de la intervención, con conductas prosociales, y red de apoyo en su pareja y su hija, sin rasgos antisociales.

Así, la sentencia aborda estas alegaciones de sustitución de la pena corporal por la libertad vigilada intensiva, donde se concluye que si bien la amparada cumple con los elementos objetivos de la pena propuesta, carece del elemento subjetivo exigido en el artículo 15 N°2 de la Ley N°18.216, debido a que según se colige de la prueba rendida en el juicio y lo informado por el departamento de extranjería de la PDI al oficio enviado por Carabineros, la sentenciada es extranjera no residente en el país, sin que exista información sobre su ingreso a territorio nacional, y que de su informe social se concluye que la única vinculación social en Chile es una pareja de tendría hace dos años, un chileno de nombre José Beltrán Levinao, y que además trabajó como temporera desde el 13 de abril al 05 de mayo de 2023, mientras que los cuatro hijos de la sentenciada se encuentran en Venezuela, 2 de ellos poseen planes de vida independiente (de 25 y 21 años), mientras que dos (de 23 y 16 años) se mantienen viviendo con familiares en aquel país, lo que hace que su vínculo social en país sea feble, una simple relación de pareja, y su arraigo familiar principal se mantiene en el extranjero -Venezuela- (sus 4 hijos y familiares).

A esto debe sumarse que al menos en dos ocasiones, su primer ingreso a Chile hace 3 años según detalló en su informe social, más el ingreso realizado en la frontera con Bolivia para cometer el delito de tráfico de drogas y una salida del país, rumbo a Perú para recepcionar la droga, lo hizo siempre de manera irregular, permitió a estos sentenciadores concluir su conocimiento y uso de vías no habilitadas al efecto y con ello, su capacidad de eludir el cumplimiento de la condena.

Por ello se estimó que la sentenciada no poseía los elementos sociales necesarios para estimar que una intervención individualizada resultaría eficaz para su efectiva reinserción social, resultando irrelevante a dicho efecto el informe psicológico de carácter positivo presentado por la defensa.

El 23 de agosto de 2024 la sentencia en estos autos RIT 330-2024 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal se encuentra firme y ejecutoriada, por haberse dictado el cúmplase de la resolución dictada por la Itma. Corte de Apelaciones, la cual, con fecha 21 de agosto del presente año confirma en lo apelado el fallo



respecto al rechazo de la imposición de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva en causa rol 906-2024 Penal del ingreso de esa Iltma. Corte.

Los Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique, Sra. Marilyn Fredes Araya, Sr. Pedro Güiza Gutiérrez y Sr. Andrés Provoste Valenzuela, se inhabilitaron para conocer este recurso por estimar que se encontraban en la hipótesis del artículo 195 N° 8 del Código Orgánico de Tribunales, por haberse pronunciado la sentencia en los autos Rol N° 906-2024 Penal

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la República, el recurso de amparo puede ser deducido a favor de toda persona que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, a fin de que se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que, cabe tener presente que el recurso de amparo exige para su procedencia que la privación de libertad de la persona por quién se recurre, obedezca a una decisión ilegal, esto es que no se sustente en norma alguna o que sea contraria a una existente.

TERCERO: Que, de la atenta lectura del recurso, resulta claro que el objeto del recurso es que se revoque una Sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, la cual se encuentra firme y ejecutoriada.

CUARTO: Que conforme se desprende del arbitrio intentado e informado por el Tribunal recurrido, no se aprecia algún acto que pueda ser calificado como ilegal, de aquellos que habilitan la procedencia de la acción que establece el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Así, la decisión de rechazar la forma de cumplimiento de la condena de la amparado se dispuso en el marco de un juicio oral en lo penal, basado en los antecedentes que rindió la defensa, los cuales se presentaron ante el legítimo contradictor, superando el tamiz de la pertinencia y luego se decidió en base a los antecedentes y argumentaciones esgrimidas en dicha oportunidad procesal.

Como fue descrito en estrado, el Tribunal recurrido, resolvió en la décima sexta motivación del fallo, haciendo una lata argumentación de los motivos por los cuales desechó la pretensión de la defensa, por lo que no es posible advertir que haya existido un actuar ilegal, que haya violentado la garantía constitucional del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WDBXPXUXSR

numeral 7 del artículo 19 de la carta magna, lo que incluso fue objeto de un recurso de apelación conocido en causa rol N° 906-2024 Penal del ingreso de la ltima. Corte de Apelaciones de Iquique.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, los fundamentos de la acción constitucional interpuesta se refieren principalmente a la revisión de una sentencia definitiva ejecutoriada, lo que técnicamente es absolutamente imposible para esta Corte, so pena de vulnerar la competencia que el propio recurso de amparo le otorga, el cual, en modo alguno, permite el conocimiento de las materias firmes y ejecutoriadas, pues de admitirse se desvirtúa el régimen de recursos propios del ámbito penal.

Por las anteriores consideraciones y normas legales citadas y lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre el Recurso de Amparo, del año 1932, se declara:

Que **SE RECHAZA** el recurso de amparo constitucional deducido en favor de la condenada Yudith Rosalith Padrino Suarez en contra del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Ciudad de Iquique.

Se previene que el Ministro, señor Pablo Zavala Fernández, si bien comparte los fundamentos del fallo que precede, estuvo además por argumentar que en el presente caso, advierte una instrumentalización del presente habeas corpus, lo que constituye un burdo intento de volver a revisar una sentencia ejecutoriada, que fue revisada por todas las vías recursivas correspondientes, lo que constituye un proceder antisistémico al proceso penal.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelar.

Rol N° 307-2024 Amparo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WDBXPXUXSR

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministra Presidente Maria Veronica Quiroz F. y los Ministros (as) Pablo Sergio Zavala F., Marco Antonio Flores L. Arica, treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro.

En Arica, a treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WDBXPXUSR